

500-2019.

**TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR:** San Salvador, a las nueve horas con cuarenta minutos del día dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

I. A sus antecedentes, escrito sin anexos rubricado por el licenciado \_\_\_\_\_, de generales conocidas en este procedimiento, en el que declinó en representación de su representada, la interposición de los recursos de revocatoria y consideración, para acudir a impugnación en la jurisdicción contencioso administrativa, recibido en esta instancia el día 17/10/2022 (fs. 90); la copia conteniendo el acuse de recibo por parte de la Fiscalía General de la República que data del 11/08/2023, del oficio identificado bajo la referencia número PRE-DC-463-2023 librado por el licenciado Ricardo Arturo Salazar Villalta, en su calidad de Presidente de la Defensoría del Consumidor en fecha 10/08/2023, mediante el cual este último informó a la referida entidad, la lista de proveedores sancionados con multas pendientes de pago luego del plazo máximo estipulado por la ley (fs. 91-93); y finalmente, el oficio librado por la Secretaría del Juzgado Tercero de lo Contencioso Administrativo el día 30/10/2023, conteniendo eschela de notificación y emplazamiento del proceso contencioso administrativo bajo la referencia número 00003-23-ST-COPA-3CO junto con copia integra de dicha resolución, en el cual se admitió la demanda contencioso administrativa interpuesta por **GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** mediante su apoderado general judicial, contra la resolución definitiva emitida a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del día 12/09/2022, en la que se le sancionó con multa por la cantidad de **SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR**, por la comisión de la infracción establecida en el artículo 43 letra c) de la Ley de Protección al Consumidor -LPC-, ordenándosele además la restitución material del derecho conculcado a la consumidora, señora \_\_\_\_\_ mediante el cambio de vehículo por otro de similares características, en cuanto al precio y antigüedad, considerando los pagos efectuados a la fecha de la resolución como parte del precio del nuevo bien, por lo que mediante dicho emplazamiento también se requirió a este Tribunal, la remisión del expediente administrativo a la sede jurisdiccional que conocería del proceso contencioso (fs. 94-98).

II. Vistas las actuaciones precedentes, este Tribunal estima pertinente realizar unas consideraciones sobre la caducidad y prescripción de la potestad sancionadora que posee por ministerio de ley.

La potestad sancionadora de la administración pública surge de la atribución conferida por el artículo 14 de la Constitución de la República, así se ha afirmado por la Sala de lo Constitucional en su sentencia de Inconstitucionalidad 8-97 de las doce horas del 23/03/2001, en la cual literalmente dice: "*que si bien es cierto que existe una potestad jurisdiccional, que exclusivamente es ejercida por el Órgano Judicial, dentro de la cual se encuentra la facultad de imponer penas según el Artículo 14 de la Constitución, también existe una potestad sancionadora de la Administración Pública, conferida en el mismo Artículo; en la actualidad se acepta dicha potestad dentro de un ámbito más genérico y se entiende que la misma forma parte, junto con la potestad penal de los tribunales, del ius puniendi superior del Estado, que además es único; de tal manera que aquellas no son sino simples manifestaciones concretas de este (...)*".



Es así que se ha establecido que tanto el procedimiento sancionatorio como el proceso penal, devienen del mismo *ius puniendi* del Estado que, al ser uno, deben aplicarse los principios del derecho penal al proceso administrativo sancionador; muestra de esta afirmación es la aplicación del principio de legalidad, entendiéndose por éste como el principio fundamental del derecho público conforme al cual todo el ejercicio del poder público debería de estar sometido a la voluntad de la ley y no a la voluntad y el arbitrio de sus integrantes, es decir, asegura a los destinatarios de la ley que sus conductas no puedan ser sancionadas sino en virtud de la misma.

Acotando lo anterior, es preciso relacionar la aplicación del principio de seguridad jurídica tal como lo establece la Sala de lo Constitucional en la inconstitucionalidad con referencia 15-99 de fecha 13/08/2002, mantiene que: *“-por seguridad jurídica se entiende la certeza que el individuo posee, en primer lugar, de que su situación jurídica no será modificada o extinguida más que por procedimientos regulares y autoridades competentes, ambos establecidos previamente. Y, en segundo lugar, la certeza de que dichos actos respetarán lo establecido legalmente sin alterar el contenido esencial de la Constitución (...).”*

Así mismo, la Sala de lo Contencioso Administrativo en resolución con referencia 27-2010 de fecha 23/06/2019 determinó que *“el principio de seguridad jurídica regula la no perpetuidad de la persecución administrativa, siendo una limitante al ejercicio del ius puniendi del Estado, debiendo así, cumplir con los plazos previamente establecidos en la ley.”*

Como se observa, en la estructura de este principio se encuentra un componente temporal definitorio que determina un plazo para que la Administración pueda iniciar y concluir un procedimiento sancionatorio, bajo la consecuencia que de no iniciarse y concluirse el mismo dentro del plazo legal, dicha administración se encontraría inhibida de dictar resolución final dado que cualquier posible responsabilidad por la comisión de una infracción administrativa se entiende extinguida.

Por lo tanto, si la Administración Pública deja transcurrir este plazo, la consecuencia lógica es que la responsabilidad debe extinguirse, al no haber usado la potestad temporal para sancionar. Consecuentemente, la Administración Pública debe ser siempre diligente y ejercer dicha potestad sancionatoria sin dilatar su actuación en el tiempo de manera indefinida, pues al no ejercerla está dejando de tutelar los intereses que por ley representa y debe proteger.

Sobre este punto, cobra importancia lo dispuesto en el artículo 163 inciso 1° de la Ley de Procedimientos Administrativos –en adelante, LPA– en cuanto establece que: *“(...) quedan derogadas expresamente todas las Disposiciones contenidas en Leyes Generales o Especiales que la contraríen (...).”* Asimismo, el artículo 2 de la LPA vigente a partir del 14 de febrero de 2019, prescribe que sus normas generales le son aplicables a los procedimientos administrativos regidos por la LPC para la Defensoría del Consumidor y de los procedimientos sancionadores de su Tribunal Sancionador.

Este Tribunal reconoce que la LPA nace con una pretensión de aplicación general y con el objeto de establecer normas claras y uniformes para el ejercicio de los procedimientos llevados a cabo en cualquier institución pública de carácter administrativo, *lo anterior, sin perjuicio de la especialidad propia de algunas materias que rijan la actividad de la Administración Pública.*



Por lo anterior, la LPA debe integrarse a las normas especiales que rigen los procedimientos sancionadores tramitados en la presente sede, en atención a los principios de legalidad, irretroactividad y unidad procesal de los procedimientos, los cuales establecen que todo procedimiento administrativo sancionador deberá tramitarse y finalizarse aplicándole la norma procesal que estaba vigente al momento de su inicio.

**III.** Verificada la efectiva aplicación de la LPA y en el estado actual del procedimiento, en este apartado desarrollará el *iter* lógico siguiente: **A.** Integración de las reglas procesales de la LPA. **B.** Desarrollo de la caducidad administrativa a nivel doctrinario y jurisprudencial. **C.** Tipo de interés o derecho tutelado en el presente procedimiento. **D.** Cómputo y efectos de la caducidad en el presente proceso.

**A.** Este Tribunal Sancionador, en procura que en todo procedimiento administrativo se respeten las reglas del Debido Proceso y en observancia de los plazos procesales previamente establecidos en la LPA y en la LPC *-que en el momento de los hechos denunciados, no establecía una disposición especial en cuanto al plazo máximo de tramitación del procedimiento administrativo sancionador-* considera que al presente procedimiento sancionador debe aplicarse la obligación establecida en el artículo 89 inciso 2° que establece:

*"El procedimiento administrativo deberá concluirse por acto o por resolución final en el plazo máximo de nueve meses posteriores a su iniciación (...)".*

Además, debe considerarse que el artículo 26 de la LPA señala: *"Los actos administrativos producirán sus efectos desde que se comuniquen a los interesados, excepto si únicamente producen efectos favorables, o no procede su notificación (...)"*, relacionado con el artículo 97 inciso 1° el cual determina: *"Todo acto administrativo que afecte a derechos o intereses de las personas, tendrá que ser debidamente notificada en el procedimiento administrativo"*.

De acuerdo con dichos parámetros, este Tribunal Sancionador es del entendimiento, que durante la sustanciación del procedimiento administrativo sancionador identificado bajo la referencia número 500-2019, **existía un máximo de 9 meses contados a partir del día siguiente de la notificación del auto de inicio del procedimiento administrativo sancionador para emitir resolución final.** Aunado a lo anterior, el artículo 82 inciso 4° de la LPA establece que: *"Si el plazo se fija por meses o años, estos se computaran de fecha a fecha (...)"*, de ahí que el plazo de 9 meses estatuido deberá computarse en días calendario.

Así, una vez concluidos estos 9 meses la LPA regula los efectos legales del acaecimiento de la finalización de este plazo en su artículo 114 numeral 2. sobre los **efectos del silencio administrativo** en los procedimientos establece que: **"2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en esta Ley"** -los resaltados son propios-.

Así pues, debido que este procedimiento administrativo sancionador fue instado mediante certificación de la denuncia presentada por el consumidor en el Centro de Solución de Controversias de la Defensoría del Consumidor, y que este Tribunal ha dado inicio a un procedimiento en ejercicio de sus potestades sancionadoras, analizará a continuación si efectivamente **se cumplen los supuestos fácticos y jurídicos del precitado artículo 114 de la LPA, que producen la caducidad del proceso.**



**B.** Sin embargo, antes de pasar a verificar la subsunción del caso en concreto a las normas procesales generales de la LPA al presente procedimiento sancionador, este Tribunal tiene a bien recordar la naturaleza y efectos de la caducidad administrativa que, de acuerdo a la legislación nacional deberán aplicarse a casos donde haya transcurrido el plazo para que opere la misma.

Tal como lo establece la doctrina del derecho procesal administrativo, la caducidad es una figura procesal que regula la terminación anormal o anticipada del procedimiento administrativo, que se refiere a un hecho jurídico-procesal específico: el transcurso de un plazo procesal señalado por ley. Por ejemplo: transcurrido el plazo previsto para el ejercicio de un derecho, o la realización de un trámite, o la interposición de un recurso, la doctrina procesal establece que se entenderá por perdido el derecho, trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse.

La caducidad también dará lugar a la terminación de un proceso, extinguiéndolo por el hecho de que no ha habido actividad procesal alguna en el plazo que establece la ley. En otros términos: en virtud del interés general, dentro del ordenamiento jurídico la caducidad se crea para que las acciones y recursos sean ejercidos dentro de un plazo concreto, de manera que los procedimientos no queden estancados indefinidamente, y que los derechos o potestades otorgados en términos favorables sean realmente aprovechados por sus titulares.

En el ámbito del derecho público administrativo y sobre el tema de la caducidad acaecida dentro de un procedimiento sancionador, la Sala de lo Contencioso Administrativo -SCA- en reciente jurisprudencia ha afirmado que la caducidad *es una figura jurídica de naturaleza netamente adjetiva, y la define como una forma de terminación del procedimiento administrativo por superación del plazo máximo para resolver, cuyo incumplimiento impide su prosecución y resolución final; es decir, supone, la terminación de un procedimiento sancionador sin una resolución sobre el fondo, cuando éste, se encuentra detenido durante un plazo excesivo de tiempo, sin que le sea notificada al administrado resolución expresa.* (Sentencia referencia 153-2014, de fecha 27-09-2019).

En dicha resolución la SCA sostiene que cuando la caducidad es producida exclusivamente por causa de la Administración pública, imposibilita a que la autoridad, ante su propia inactividad, continúe instruyendo un procedimiento sancionatorio fuera del plazo legalmente establecido para ello. Es decir, que una vez iniciado un procedimiento si éste no concluye en el plazo legal, **la consecuencia jurídica es que este, caduca; configurándose así de facto una forma de darlo por finalizado.**

**C.** En relación con las características de la pretensión que se analiza en el presente procedimiento administrativo sancionador, es necesario destacar que el derecho del consumidor, por su propia naturaleza, requiere mecanismos y procedimientos que atiendan adecuadamente la problemática en torno a la protección de los consumidores, y tales mecanismos tienen que cumplir con el requisito de eficacia, que implica la posibilidad de obtener una respuesta del sistema a los reclamos del consumidor en tiempo, modo y condiciones de acceso, los cuales no deben desnaturalizar la protección de los derechos, sino que están llamados a potenciarlos.

Sin embargo, el sistema de protección al consumidor en su conjunto también está regido por las normas del derecho administrativo y no escapa de las regulaciones que para tal efecto sean emitidas con el objeto de agilizar la administración pública, de modo que los procedimientos o mecanismos que tienen por objeto garantizar la



referida protección -brindándole al consumidor una solución a la problemática planteada- deberán realizarse en el lapso previsto previamente por el legislador. Lo anterior, no es solo una afirmación dogmática sino además imperativa para el legislador y para el aplicador de la ley, de manera que corresponde a las leyes dar las precisiones y a los juzgadores las aplicaciones.

En ese sentido, si bien corresponde al Tribunal Sancionador la instrucción de los procedimientos sancionatorios en materia de protección al consumidor, imponer las sanciones o resolver lo que corresponda, así como ordenar al infractor, en los casos de afectación a los intereses individuales, colectivos o difusos, la reposición de la situación alterada por la infracción, a su estado original, dichas atribuciones deben realizarse en el plazo establecido por las leyes de la materia, caso contrario, deberá aplicar la consecuencia jurídica derivada del exceso en el plazo legalmente determinado.

Por lo anterior, aunque este Tribunal advierte la existencia de un derecho o interés individual que debe ser protegido o tutelado dentro del procedimiento sancionatorio y si bien se reconoce el deber de proteger los intereses individuales que puedan estar en juego dentro de un procedimiento como en el iniciado en el caso de mérito, debe acotarse que también debe ceñir su actuación al estricto cumplimiento de la ley procesal aplicable al caso concreto, por lo cual, si no se ha podido finalizar el procedimiento dentro del plazo legalmente establecido para tal efecto, corresponde aplicar la consecuencia jurídica prevista para tal supuesto en el ordenamiento.

Adicionalmente, y sobre las características del procedimiento aplicado por este Tribunal, es necesario resaltar que este es un procedimiento sancionador que puede ser instado por la Presidencia de la Defensoría o por denuncia de parte y a partir de ese momento se le impone a la administración el deber de analizar si existen elementos legales y jurisprudenciales suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio como consecuencia de la obligatoriedad de la acción punitiva del Estado y de tramitarlo aplicando la normativa prevista para tal efecto, esto es, aplicando el debido proceso.

Ahora bien, al analizar la LPA se observa que esta establece en su artículo 89 inciso 2º, un plazo máximo de nueve meses para concluir los procedimientos administrativos que hayan sido iniciados de oficio o a petición del interesado, dando como consecuencia jurídica la caducidad para los procedimientos en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras -artículo 114 inciso 2º de la LPA citado al inicio de esta resolución- como es el caso de los procedimientos sancionatorios sustanciados en esta sede administrativa, a instancia de los consumidores una vez se cumplan los presupuestos procedimentales aplicables.

Se concluye entonces, que en los procedimientos administrativos sancionatorios en materia de protección al consumidor —sean iniciados por la Presidencia de la Defensoría o por denuncia de parte— se ejerce la potestad sancionadora de la Administración con el propósito de proteger y tutelar el interés público e individual involucrado en la defensa de los consumidores, misma que debe ser ejercida de conformidad con los parámetros y plazos legales establecidos, es decir, con estricto cumplimiento del principio de legalidad que rige la actuación de la administración, lo que impone a este Tribunal Sancionador la aplicación de la LPA y las consecuencias jurídicas derivadas de su inactividad a todos a aquellos procedimientos sancionadores iniciados bajo su vigencia.

En igual sentido, la SCA mediante sentencia definitiva del 23/11/2017 emitida en el proceso clasificado bajo la ref. 80-2010 ha establecido como criterio que debe regir las actuaciones de este Tribunal lo previsto en



el artículo 19 inciso primero del Código Civil, el cual establece que “*Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu*”. Adicional a ello, en la referida resolución ha reconocido la aplicación del aforismo jurídico «... *donde no distingue el legislador no debe distinguir el aplicador, menos aún en perjuicio del administrado*».

En suma, en aplicación de un razonamiento silogístico y gramatical de la LPA, para determinar la aplicación de la consecuencia jurídica establecida para tal efecto en el artículo 89 inciso 2° a un procedimiento administrativo sancionador, deberá analizarse si se trata de un procedimiento a través del cual la administración pretende la imposición de una sanción —ya sea iniciado por denuncia de parte interesada o de manera oficiosa— y constatarse que ha transcurrido el plazo establecido en el referido régimen normativo (9 meses) sin que la autoridad haya dictado y notificado resolución expresa.

**D.** Este Tribunal Sancionador de manera oficiosa procede a la revisión del presente expediente en el cual, constan las siguientes actuaciones:

**A.** (i) Este procedimiento sancionador inició con la resolución pronunciada a las nueve horas con veintitrés minutos del día 02/12/2021 -acto administrativo suscitado por la denuncia interpuesta por la señora

en fecha 05/02/2019-, la cual fue debidamente comunicada a la proveedora **GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** mediante notificación directa en sus oficinas el día 15/12/2021, según consta en el acta respectiva, atribuyéndosele la comisión de la infracción establecida en el artículo 43 letra c) de la LPC (fs. 55-57, 59), por ello, al realizar el cómputo en días calendario del término o plazo de la caducidad al caso en concreto, este Tribunal advierte que, el plazo de los 9 meses iniciado en fecha 16/12/2021 (el siguiente día hábil al de la notificación a las proveedoras) y vencía el 16/09/2022.

(ii) En virtud de lo anterior, el día 23/08/2021 se recibió escrito con documentación anexa (fs. 61-68), presentado por el apoderado general judicial con facultades especiales de la proveedora instruida, contestó en sentido negativo la audiencia que le fue conferida a su representada.

(iii) Posteriormente, en fecha 12/05/2022, este Tribunal dictó la resolución que abrió a pruebas el procedimiento, misma que fue notificada a la indiciada en sus oficinas el 08/06/2022, según se consignó en acta (fs. 69-70).

(iv) Durante el término probatorio, la proveedora por medio de su representante en el procedimiento efectuó una última intervención mediante escrito con documentación presentado el día 22/06/2022, en el que además planteó alegatos de defensa y propuso prueba testimonial (fs. 72-75).

(v) Finalmente, en fecha 12/09/2022 se pronunció la resolución final del procedimiento administrativo sancionador, en la cual, en el romano **XI.** literales b) y c) se impuso a la proveedora **GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** la sanción pecuniaria de **SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR (\$7,604.25), equivalentes a veinticinco meses de salario mínimo mensual en la industria**—D.E. N°6 del 21/12/2017, publicado en el D.O. N°240, tomo 417 del 22/12/2017— y se le ordenó la restitución material a favor de la consumidora

con el cambio del vehículo objeto de reclamo, por otro vehículo de características similares, en cuanto a precio y antigüedad. Para hacerlo, deberá considerar el importe



pagado a la fecha como parte del precio del nuevo bien, del cual no podrá deducirse una cuantía por depreciación superior a la comprendida desde el año de la compra al año 2019, en concordancia con el uso del bien; siempre y cuando la consumidora no opte por la devolución de lo pagado conforme a su derecho establecido en el artículo 4 letra i) de la LPC, **la cual se notificó de forma directa a la entonces sancionada el día 03/10/2024.**

De todo lo antes apuntado, se colige que el último acto administrativo emitido por esta autoridad administrativa en este procedimiento administrativo sancionador, fue la resolución que puso fin al procedimiento con la sanción y restitución material, fechada del 12/09/2022 y cuyo acto de notificación acaeció el 03/10/2022 (fs. 76-87, 88), **desplegando sus efectos a partir del siguiente día hábil de realizado el acto de comunicación.**

B. En hilo de lo anterior, tal como se expuso en el acápite precedente, el inicio del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la proveedora **GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** inició con el auto que data de las nueve horas con veintitrés minutos del 02/12/2024, notificado en legal forma a la presunta infractora el día 15/12/2021 (fs. 55-57, 59).

De ahí que, al realizar el cómputo en días calendario del término o plazo para que opere la caducidad del procedimiento al caso al caso *subjudice*, este Tribunal advierte que, **el plazo de los 9 meses inició en fecha 16/12/2021 (el siguiente día hábil al de la notificación a las proveedoras) y vencía el 16/09/2022.** No obstante lo anterior, **la notificación del acto administrativo que puso fin al procedimiento** con la determinación de la presunta responsabilidad de **GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** juntamente con la imposición de la sanción y restitución en el mismo sentido, **se materializó hasta el 03/10/2022, es decir 17 días calendario después de expirado el plazo máximo de tramitación del procedimiento sancionatorio** según la disposición procedimental aplicable en ese momento, es decir, el artículo 89 de la LPA.

En ese sentido, de conformidad al artículo 89 inciso 2° de la LPA, este Tribunal comprueba hoy, que a la fecha que se notificó la referida resolución, ya se superó el plazo máximo de 9 meses para emitir la resolución final, y de esa forma se quebrantó la normativa procedimental aplicable, al emitirse un acto administrativo fuera del término señalado por la ley para su emisión, vulnerando así el principio de seguridad jurídica. Dicho de otra forma, el acto administrativo pronunciado no corresponde a la consecuencia jurídica prevista por el legislador en el supuesto en cuestión, por lo cual, estaría viciado de forma insubsanable, consecuentemente así será declarado.

Como se observa, en la estructura del principio de seguridad jurídica resguardado en la disposición legal *ut supra* relacionada, subyace un componente esencial de índole temporal vinculante en cuanto a los plazos para que esta Administración pueda iniciar y concluir un procedimiento sancionatorio, bajo la consecuencia que de no iniciarse y concluirse el mismo dentro del plazo legal, dicha administración se encontraría inhibida de dictar resolución final por carecer de facultades legales para su emisión.

C. Ante el acto administrativo en análisis, mismo que según el análisis precedente, se encuentra indefectiblemente viciado, este Tribunal debe ahondar en la potestad de la Administración Pública de revisar sus propios actos y de revocar sus actuaciones de oficio o a petición de parte, con el fin último de respetar el ordenamiento jurídico.



Al respecto, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha señalado: “*La revocación de los actos de la Administración Pública, es un acto jurídico unilateral por medio del cual se invalida otro otorgado anteriormente, dejándolo sin efecto.*” (SCA referencia 90-T-2004 del 06/10/2008).

También la misma Sala en la sentencia definitiva de referencia 114-P-2001 de fecha 13/05/2002 estableció: “*La revocación es una de las formas de extinción de los actos administrativos, que es además la extinción de un acto de esa naturaleza dispuesta por la misma administración pública, fundándose para ello tanto en razones de oportunidad o interés público, como en razones de ilegitimidad, ésta más bien es una potestad de que dispone la administración pública y que puede ejercer por motivos fundados, llegando a constituir un verdadero deber de aquella*”.

En concordancia con los precedentes citados, el artículo 148 incisos 1º y 2º de la LPC establece: “*Artículo 148. Aclaraciones y correcciones. El Tribunal podrá de oficio, o a instancia de parte, aclarar conceptos oscuros o corregir errores materiales que contengan las resoluciones*”.

Asimismo, el artículo 121 de la LPA prescribe lo siguiente: “*La Administración Pública podrá revocar de oficio sus actos desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por la Ley, o sea contraria al principio de igualdad o al interés público*”. Por otra parte, el artículo 122 de la LPA establece: “*En cualquier momento, la Administración podrá, de oficio o a solicitud del interesado, rectificar los errores materiales, los de hecho y los aritméticos. Esta resolución deberá ser comunicada a cuantos puedan tener un interés legítimo en el acto.*”

Por consiguiente, luego de trasladar las consideraciones preliminares al supuesto en análisis, y en observancia al principio de legalidad y seguridad jurídica establecidos en la Constitución de la República y la LPA, ***es procedente revocar y dejar sin efecto oficiosamente*** la resolución pronunciada a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del día 12/09/2022 (fs. 76-87), así como el acto de comunicación mediante el cual notificada a las intervinientes en fecha 03/10/2022; y por tanto, el procedimiento será retrotraído al estado en el que se encontraba previo a la emisión del acto administrativo revocado, en el caso particular, hasta la recepción del escrito recibido el 22/06/2022.

**IV.** Sin perjuicio de la caducidad evidenciada en el romano **III.** letra **D** de esta resolución, este Tribunal forzosamente debe determinar si los hechos denunciados han prescrito, ya que según dispone el artículo 117 inciso 4º de la LPA: “*La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de los derechos de los particulares o, en su caso, las facultades de la administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de la prescripción*” -el resaltado es nuestro-.

La disposición precitada significa literalmente que, en un procedimiento sancionador la caducidad no genera la extinción de la responsabilidad administrativa y tampoco inhibe a la administración pública de su facultad de imponer una sanción, pues no produce *per se* la prescripción de las acciones de la Administración.

De manera que, si el derecho para perseguir la infracción no ha prescrito podrá iniciarse un nuevo procedimiento por los mismos hechos que el anterior; y para que tal efecto suceda se debe constatar el plazo de la prescripción de las infracciones.



En ese sentido, cuando opera la caducidad debe necesariamente efectuarse el cálculo del plazo de la prescripción de la acción establecido en el artículo 107 de la LPC y verificar si es posible o no iniciar un nuevo procedimiento que deba instruirse por este Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 117 inciso 4º de la LPA.

En hilo de anterior, debe considerarse que el plazo general para el acaecimiento de la prescripción extintiva que establecía el artículo 107 de la LPC vigente al momento de los hechos denunciados, era de 3 años; de manera que, el conteo del plazo de la referida figura procedimental debe realizarse desde la fecha en que sobrevinieron los hechos que dieron lugar a la supuesta infracción.

Al respecto, ya que la naturaleza de la infracción atribuida imputada – artículo 43 letra c) de la LPC- puede considerarse *continuada*, el último acto aparentemente constitutivo de la conducta señalada como infractora fue perpetrado por la sociedad denunciada el 15/01/2019, pues en tal fecha la consumidora interpuso su último reclamo por aparentes desperfectos mecánicos en el bien cubierto por la garantía, según la documentación que consta agregada al expediente (fs. 15-16).

Por otra parte, como ya se acotó en esta resolución, el auto que ordenó inicio del procedimiento administrativo sancionador se emitió el día 02/12/2021 y fue efectivamente notificado con conocimiento de la presunta infractora el 15/12/2021; en consecuencia, se tuvo por interrumpido en esa precisa fecha. En consonancia con lo anterior, el plazo máximo para emitir resolución final válida en el procedimiento se alcanzó el 16/09/2022; por lo cual, *operó la caducidad por ministerio de ley, sin necesidad de un pronunciamiento previo por este Tribunal*, una vez transcurrida dicha fecha.

En consecuencia, pese a que el actual procedimiento administrativo se inició dentro del plazo de 3 años para la concurrencia de la prescripción establecido por la norma especial -artículo 107 LPC vigente al momento de los hechos–, la caducidad operó para el mismo en fecha 17/09/2022, por lo que, a tenor de lo previsto en el artículo 117 inciso 3º de la LPA, *el plazo de prescripción no fue interrumpido*.

Es así que, desde el día 15/09/2019 a la fecha de emisión de este pronunciamiento -18/12/2024- han transcurrido cinco años, tres meses y tres días, desde el probable cometimiento de la infracción prevista y sancionada en el artículo 43 letra c) de la LPC, por incumplimiento de la proveedora incoada de la garantía ofrecida a la consumidora, de lo que se concluye que al momento de emisión de este pronunciamiento, la presunta infracción ya se encuentra prescrita por haber superado los 3 años como máximo para el ejercicio de la acción de consumo y debe declararse la correspondiente extinción de responsabilidad y ordenarse el archivo de las actuaciones.

V. En razón de lo anterior y con fundamento en lo señalado en los artículos 97, 144, 148, 107, 167 de la LPC; 92 del Reglamento de la LPC y 26, 89 inciso 2º, 97, 114 numeral 2., 117 inciso 3º, 121 y 122 de la LPA, se **RESUELVE**:

7 a) *Revóquese* por contrario imperio la resolución de las nueve horas con cuarenta y dos minutos del día 12/09/2022 y el correspondiente acto de notificación de fecha 03/10/2022 (fs. 76-87, 88).

b) *Retrotráigase* el procedimiento al estado en el que se encontraba previo a la emisión del acto revocado.

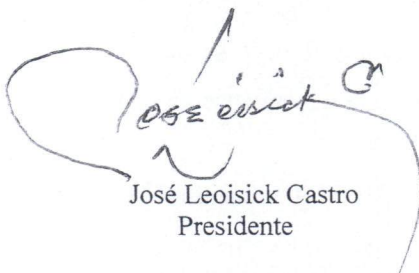


c) *Declárase la finalización* del presente procedimiento administrativo promovido por la denuncia de la señora \_\_\_\_\_, por la concurrencia de la caducidad administrativa al excederse el plazo máximo para emitir y notificar la resolución final del mismo.

d) *Declárase la extinción* de la responsabilidad administrativa derivada de los hechos denunciados en este procedimiento administrativo sancionador, por el acaecimiento de la prescripción extintiva según el plazo establecido en el artículo 107 de la LPC vigente al momento de los hechos.

e) *Archívense* las actuaciones del presente procedimiento sancionador.

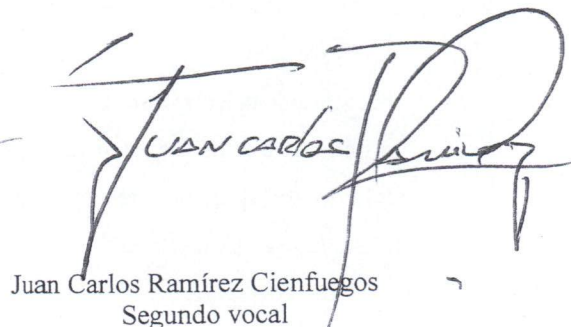
f) *Notifíquese.*



José Leoisick Castro  
Presidente



Pablo José Zelaya Meléndez  
Primer vocal



Juan Carlos Ramírez Cienfuegos  
Segundo vocal

**PRONUNCIADA POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR QUE LO SUSCRIBEN.**

VR/MIP



Secretario  
del Tribunal Sancionador